



# Asamblea General Consejo de Seguridad

Distr. general  
16 de febrero de 2021  
Español  
Original: inglés

**Asamblea General**  
**Décimo período extraordinario de sesiones de emergencia**  
Tema 5 del programa  
**Medidas ilegales israelíes en la Jerusalén Oriental**  
**Ocupada y el resto del Territorio Palestino Ocupado**

**Consejo de Seguridad**  
**Septuagésimo sexto año**

## **Cartas idénticas de fecha 16 de febrero de 2021 dirigidas al Secretario General, la Presidencia de la Asamblea General y la Presidencia del Consejo de Seguridad por el Observador Permanente del Estado de Palestina ante las Naciones Unidas**

La crítica situación en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, sigue deteriorándose debido a las políticas y prácticas ilegales de Israel, la Potencia ocupante, contra el pueblo palestino, que van en aumento.

Durante el mes de enero de 2021 Israel cometió graves violaciones del derecho internacional y lamentablemente en febrero se mantuvo la misma trayectoria de colonización sistemática y abusos contra los derechos humanos, afianzando la ocupación y perjudicando aún más las perspectivas de una solución justa. Conforme aumentan los asentamientos ilegales y las actividades de anexión, también lo hacen la opresión y el castigo colectivo contra el pueblo palestino: solo en enero al menos 456 palestinos fueron detenidos y encarcelados, entre ellos al menos 93 niños y 8 mujeres.

También ha seguido en aumento el número de demoliciones de viviendas. La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios informa de que en 2020 se produjo el mayor número de demoliciones de viviendas y estructuras palestinas por parte de las fuerzas de ocupación israelíes desde que se empezó a documentar esta práctica inhumana. Teniendo en cuenta los niveles de demolición y despojo registrados en enero, está claro que Israel insiste en mantener su senda de impunidad, por lo que cabe augurar un nuevo récord de violaciones en 2021. Desde inicios de 2021, las fuerzas de ocupación israelíes ya han demolido, confiscado u obligado a los palestinos a demoler al menos 178 estructuras, desplazando a más de 259 personas, entre ellas al menos 140 niños.

Como se ha señalado en cartas anteriores, en dos grandes campañas de demolición, los días 1 y 3 de febrero, las fuerzas de ocupación israelíes derribaron más de 45 estructuras en Khirbat Humsah (también conocida como Humsah al-Buqay'ah) en el valle del Jordán, desplazando repetidamente y dejando sin hogar a las 60 personas, entre ellas 35 niños, que componen las nueve familias de esa parte de la comunidad, quienes ahora afrontan el riesgo de ser trasladadas por la fuerza.



Esta vulnerable comunidad beduina ha sido objeto de cuatro demoliciones masivas por parte de las fuerzas de ocupación israelíes, incluida la destrucción de viviendas, de refugios para el ganado y de instalaciones de agua, muchas de las cuales habían sido financiadas por la Unión Europea y el Reino Unido.

Pese a las restricciones israelíes a la circulación, el Gobierno palestino y organizaciones internacionales se movilizaron para proporcionar ayuda humanitaria urgente a las familias desplazadas. Sin embargo, según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios y el Consejo Noruego para los Refugiados, las fuerzas de ocupación israelíes han confiscado una parte importante de la ayuda, incluidas las tiendas de campaña, dejando a las familias desplazadas a merced de las duras condiciones invernales y violando innumerables derechos humanos, incluido el derecho a la educación: más de 50 escuelas han sido objeto de órdenes de demolición indiscriminadas. A este respecto nos referimos a la declaración conjunta del 5 de febrero de 2021 formulada por organismos de las Naciones Unidas (la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios, la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia) en la que se llama la atención de la comunidad internacional sobre la campaña de demolición de Israel contra Humsah al-Buqay'ah y se considera que estas acciones de la Potencia ocupante constituyen violaciones directas del derecho internacional.

Las repercusiones de esas acciones ilegales e inmorales en los niños son especialmente graves. Según documentación de la organización Save the Children, en 2020 más de 840 estructuras fueron demolidas por la ocupación, desplazando a más de 500 niños, dejándolos a ellos y a sus familias sin hogar, devastando sus comunidades y perturbando todos los aspectos de su vida. Como recalcó Jason Lee, director nacional de Save the Children, los niños están pagando el precio más alto. Derribar una vivienda, una escuela u otra infraestructura vital, especialmente durante una pandemia, destruye su derecho a la educación y a tener un hogar. Va en contra de su futuro, su salud, su seguridad y su bienestar.

Además de desarraigar y traumatizar a nuestro pueblo, Israel también sigue arrasando y confiscando tierras palestinas y arrancando árboles, robando propiedades palestinas y destruyendo medios de sustento. En el período comprendido entre el 19 de enero y el 1 de febrero de 2021, las fuerzas de ocupación israelíes arrancaron miles de árboles cerca de la ciudad de Tubas que habían sido plantados ocho años antes en el marco de un proyecto supervisado por el Ministerio de Agricultura palestino. En el transcurso de otra agresión, las fuerzas israelíes arrasaron casi 1.000 árboles en Belén. Ambos incidentes se produjeron con el argumento de que el terreno había sido declarado “tierra del Estado”, lo que es una afirmación sin fundamento esgrimida para justificar las intenciones anexionistas de Israel.

La campaña de demolición de Israel está concebida para desarraigar a los palestinos de sus tierras mediante el despojo patrocinado por el Estado. El objetivo es claro: el máximo de territorio y el mínimo de presencia de palestinos, es decir, la depuración étnica. La aplicación metódica de este plan ha sido especialmente intensa en las zonas críticas para la realización de la solución de los dos Estados y la preservación de la contigüidad del Estado de Palestina, que son dos conceptos que la Potencia ocupante pretende destruir.

A pesar de que la comunidad internacional ha pedido expresamente el cese de las demoliciones de viviendas, los desalojos forzados, la confiscación de tierras y todas las actividades de asentamiento, como se refleja en las resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas, y aunque Gobiernos, parlamentarios, grupos de derechos humanos y otras organizaciones internacionales también han pedido poner fin a esas acciones ilegales, Israel sigue violando el derecho internacional con absoluta

impunidad. Las consecuencias para el pueblo palestino han sido nefastas y las perspectivas de una paz justa se han visto sofocadas.

Al día de hoy, cientos de familias palestinas de Jerusalén Oriental corren el riesgo de ser despojadas de sus viviendas y propiedades tras las batallas legales infundadas emprendidas por organizaciones de colonos estrechamente vinculadas al Gobierno de Israel. Para agravar la desdicha de las familias vulnerables, que viven en Shaykh Jarrah y Silwan desde mucho antes del establecimiento de Israel y del comienzo de la ocupación, los tribunales israelíes, en los que no hay justicia, pretenden en realidad transferir las viviendas y propiedades de dichas familias a los colonos.

Dada la urgencia del asunto, más de 80 parlamentarios británicos enviaron recientemente una carta a su Ministro de Asuntos Exteriores, Sr. Raab, en la que indicaron que debía impedirse el inminente despojo a familias palestinas en Jerusalén por parte de Israel, y que dicho despojo y traslado forzoso constituye una grave violación del Cuarto Convenio de Ginebra. Además, los parlamentarios pidieron que se adoptasen las medidas legales y políticas necesarias para hacer frente al despojo masivo al pueblo palestino por parte de Israel, así como a su campaña de asentamientos. Subrayaron que debían tenerse en cuenta todas las medidas, incluida la reducción del compromiso diplomático y la prohibición del comercio de productos de los asentamientos, en plena conformidad con las obligaciones dimanantes del derecho internacional, con el fin de desafiar la economía de los colonos que lucra con la ocupación.

Por su parte, las organizaciones humanitarias han expresado su preocupación y han emitido advertencias sobre la campaña de despojo de Israel contra el pueblo palestino. El 9 de febrero, el Consejo Noruego para los Refugiados subrayó la urgencia del asunto, advirtiendo que la comunidad internacional ha sido testigo una vez más de agresiones contra algunas de las familias más pobres en las tierras palestinas ocupadas. Las palabras vacías de “preocupación” no son suficientes para estas familias que se encuentran sin hogar y privadas de las necesidades más básicas. La comunidad internacional, incluidos los Gobiernos de los países europeos, debe hacer más para poner fin a los desplazamientos forzados y debe exigir a Israel que compense a las víctimas palestinas.

Lamentablemente, el hecho de que hasta ahora no se hayan exigido responsabilidades a Israel ha envalentonado en gran medida a los autores de esos crímenes, incluidos los actos de violencia, destrucción y terror de los colonos israelíes en toda la Palestina ocupada. Contando con la protección de los soldados israelíes, los colonos extremistas siguen matando, agrediendo y secuestrando a civiles palestinos y dañando viviendas, arrancando árboles, profanando lugares de culto, e incitando, acosando e intimidando habitualmente a la población palestina, incluso a niños.

El 5 de febrero, colonos israelíes dieron muerte a tiros a un palestino en Ras Karkar, al norte de Ramala. Khaled Nofal, de 34 años, fue asesinado por colonos cerca del puesto de avanzada ilegal de “Sde Efraim”, erigido en tierras palestinas de propiedad privada confiscadas para la expansión de los asentamientos. Las fuerzas de ocupación israelíes impidieron el acceso de personal médico palestino al lugar y aún no han llevado a los autores ante la justicia.

El 10 de febrero, un colono israelí del infame asentamiento de “Ariel” atropelló a un palestino cerca de Salfit, causándole la muerte de forma instantánea. El 12 de febrero se produjo otro atentado con coche perpetrado por colonos cerca de Tubas, a raíz del cual murió un palestino y otros dos resultaron heridos. Mientras realizaba una excursión, Bilal Bawatneh, de 52 años, murió en el acto cuando el colono autor del delito escapó utilizando caminos exclusivos para colonos que conducían a asentamientos cercanos. Si los autores del delito hubieran sido palestinos, es bien

sabido que las fuerzas israelíes habrían demolido las viviendas de sus familias y restringido la circulación por la Ribera Occidental, imponiendo un castigo colectivo a toda la población civil, con el fin de castigar al autor y haciendo caso omiso del derecho internacional.

La semana pasada salieron a la luz también imágenes de vídeo que mostraban a un colono israelí atacando a la Iglesia Ortodoxa Rumana de Jerusalén, causando daños a la propiedad de la iglesia. Una declaración del Patriarcado Ortodoxo de Jerusalén advirtió que los ataques de los extremistas israelíes contra las iglesias y mezquitas de Jerusalén están aumentando de forma alarmante, y el hecho de que las autoridades oficiales israelíes no les hayan hecho frente y hayan tolerado esos actos terroristas contribuirá sin dudas a agudizar el conflicto en la Ciudad Santa, dificultando aún más de la consecución de la paz y la estabilidad.

El 10 de febrero, el alcalde de Al-Jalil (Hebrón), Taysir Abu Senineh, recibió numerosas amenazas de muerte por parte del líder del asentamiento llamado “Qiryat Arba”, así como amenazas proferidas por el parlamentario israelí Moshe Abutbul. Tanto el líder de los colonos como el citado político han intensificado su campaña conjunta de incitación antipalestina destinada a intimidar a la población y a consolidar la “ocupación eterna” de Israel en Al-Jalil, incluidas las colinas del sur de la zona donde las comunidades palestinas se encuentran bajo grave amenaza de desplazamiento, incluso en Masafer Yatta.

Los ataques e incursiones militares israelíes se han intensificado, incluso en este período de pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19). Durante una redada nocturna llevada a cabo el 10 de febrero, las fuerzas de ocupación israelíes realizaron múltiples incursiones en la Ribera Occidental Ocupada y detuvieron a más de 30 palestinos, la mayoría de ellos niños, que se suman a los miles de civiles palestinos que la ocupación mantiene cautivos de manera ilegal.

Cuesta imaginar la gravedad de la experiencia y el trauma sufridos por los niños palestinos cuando fueron detenidos, vendados sus ojos y alejados de sus padres y de sus hogares en medio de la noche, para ser más tarde víctimas de las prácticas sistemáticas de detención arbitraria y tortura por parte de Israel. Reiteramos el llamamiento para la liberación inmediata de todos los niños palestinos retenidos por la Potencia ocupante y para que Israel cumpla sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos, incluida la Convención sobre los Derechos del Niño.

Volviendo a la situación en la Franja de Gaza, nuevamente damos la voz de alarma acerca de las deplorables condiciones humanitarias y socioeconómicas que se dan allí debido al bloqueo ilegal israelí que ha causado tan graves privaciones, hambre y miseria a sus dos millones de habitantes, la mayoría de ellos refugiados palestinos, que siguen soportando las penurias del despojo y el desplazamiento originales que les infligió Israel. Hoy, en otro acto inhumano, la Potencia ocupante ha bloqueado la entrada en Gaza de 2.000 dosis de vacunas contra la COVID-19 destinadas a los trabajadores sanitarios de primera línea, incluido el personal de las unidades de cuidados intensivos que tratan a pacientes con el virus. Ello constituye otra grave violación de las obligaciones de Israel en virtud del Cuarto Convenio de Ginebra.

Las fuerzas de ocupación israelíes siguen infiltrándose en las costas y las tierras agrícolas de Gaza con buques militares y maquinaria de movimiento de tierras, atacando indiscriminadamente a los civiles y causando importantes daños a la ya devastada economía e infraestructura de Gaza. Hace apenas dos días, las fuerzas de ocupación abrieron fuego contra agricultores palestinos que trabajaban en sus tierras cerca de la frontera, privándoles de su fuente de sustento y de su medio de vida. Ello fue precedido por otro ataque contra pescadores palestinos, a los que se disparó con munición real y cañones de agua el 7 de febrero.

La reciente decisión de la Corte Penal Internacional de afirmar su jurisdicción sobre la situación de Palestina hace esperar que la rendición de cuentas y la justicia que tanto tiempo llevan esperando sean posibles. La capacidad disuasoria de la Corte es también indudable, ya que se ha puesto sobre aviso a los autores de crímenes de guerra contra el pueblo palestino. Pese a las amenazas de Israel y a las falsas acusaciones de antisemitismo contra la Corte Penal Internacional, la Corte ha reconocido la legitimidad y la necesidad de investigar de forma imparcial la situación en Palestina por la causa de la justicia, que es un elemento fundamental para el logro de la paz.

Desde el inicio de la ocupación israelí del territorio palestino en 1967, Israel aún no ha rendido cuentas en absoluto por décadas de impunidad y opresión. El resultado ha sido devastador para el pueblo palestino y para el objetivo de una paz y seguridad justas y duraderas entre Palestina e Israel, lo que hace que la aplicación del derecho internacional, incluidas las resoluciones de las Naciones Unidas, sea más fundamental que nunca. En particular, el Consejo de Seguridad debe cumplir la obligación de mantener la paz y la seguridad internacionales que le incumbe en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. Sin duda, esto también requiere medidas preventivas, incluidas medidas relativas a la rendición de cuentas. Por lo tanto, volvemos a hacer un llamamiento para que el Consejo actúe en defensa del derecho y aplique sus resoluciones sobre la cuestión de Palestina. El Consejo debe dejar de lado su inmovilismo y actuar de inmediato para poner fin a la ocupación israelí en todas sus manifestaciones, incluido el régimen de asentamientos coloniales, así como apoyar el logro de una paz justa, duradera y amplia.

En conclusión, recordamos que a fines de 2016, cuando se le preguntó acerca de la ocupación israelí, el entonces Secretario General, Ban Ki-moon, declaró que la ausencia de avances significativos en pro de una resolución política y las continuas violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario se veían agravadas por la falta de rendición de cuentas por las violaciones anteriores, y que la principal prioridad debía ser combatir la impunidad. Casi cinco años más tarde, la ocupación se afianza cada vez más, mientras que sigue sin haber rendición de cuentas. Debemos aprovechar esta oportunidad para evitar que pase otro año de inacción y de impunidad feroz a costa de más sufrimiento de los palestinos y de otra generación perdida.

La presente carta se suma a nuestras 704 cartas anteriores sobre la crisis que afecta al Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, que es territorio del Estado de Palestina. Esas cartas, de fechas comprendidas entre el 29 de septiembre de 2000 (A/55/432-S/2000/921) y el 4 de febrero de 2021 (A/ES/10/849-S/2021/108), constituyen una relación sucinta de los crímenes cometidos por Israel, la Potencia ocupante, contra el pueblo palestino desde septiembre de 2000. Israel, la Potencia ocupante, debe rendir cuentas por todos esos crímenes de guerra, actos de terrorismo de Estado y violaciones sistemáticas de los derechos humanos cometidos contra el pueblo palestino, y los responsables deben comparecer ante la justicia.

Les agradecería que tuvieran a bien hacer distribuir la presente carta como documento del décimo período extraordinario de sesiones de emergencia de la Asamblea General, en relación con el tema 5 del programa, y del Consejo de Seguridad.

(Firmado) Riyadh **Mansour**  
Ministro y  
Observador Permanente